

El Poder Judicial duda si el auto de Varela implica apartar a Garzón

Los vocales progresistas dan tres nombres para la Sala Tercera del Supremo

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ
Madrid

Las aguas judiciales siguen convulsas. Con el telón de fondo de las críticas y manifestaciones ante las querellas que tramita el Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón, los vocales del sector progresista del Consejo del Poder Judicial, con tres ausencias, se reunieron ayer para perfilar su estrategia con vistas a su sesión plenaria del próximo día 22. Apenas se habló de Garzón. Pero porque no hay certidumbre de que en el pleno de ese día el Consejo debata si suspende o no al magistrado a la vista del auto del juez del Supremo Luciano Varela en el que dictamina que "ha lugar a proceder" contra el magistrado por su actuación en las diligencias contra las víctimas del franquismo.

La duda entre algunos vocales progresistas es de interpretación: es decir, si la indicación de Varela de "ha lugar a proceder" es suficiente o hay que esperar a que la resolución, recurrida por el magistrado ante la Sala de lo Penal, sea firme. De todas formas, no está claro que el Consejo aborde este asunto el día 22, ya que el Supremo aún no le ha remitido oficialmente el auto de Varela.

La remisión del auto es una facultad del presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y éste no ha remitido nada aún, según fuentes del Consejo. Quizás, interpretan estos medios, porque entienden que hay que esperar a que haya un auto firme de apertura del juicio oral. Por tanto, y salvo que el auto llegase hoy, o el lunes, el asunto Garzón no llegaría al pleno del día 22. Y es que, legalmente, el orden del día debe estar configurado con 72 horas de antelación y sólo una decisión unánime de todos los vocales a favor de incorporarlo sobre la marcha salvaría este obstáculo.

Pero no es fácil hallar unanimidades en este Consejo, y menos en un asunto tan espinoso. Así, la eventual suspensión del magistrado tendría que esperar al siguiente pleno, a finales de mayo.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, también salió ayer en defensa de los jueces del Supremo frente a las "intolerables" críticas que está recibiendo este alto tribunal por el asunto del juez Baltasar Garzón. Sin mencionarlo, era una clara alusión al acto celebrado esta semana en la Universidad Complutense de Madrid.

Conde-Pumpido defendió la "amplia libertad de expresión" que existe en España pero señaló que las críticas que se están excediendo de lo razonable. A renglón seguido volvió a insistir en que, a su juicio, Garzón no prevaricó en su actuación indagatoria sobre los crímenes del franquismo y que su departamento mantendrá que no debe sentarse en el banquillo.



Acto de apoyo a Garzón, ayer en el Arco del Triunfo de Madrid. / C. MANUEL

También terció en la polémica Gregorio Peces-Barba, que fue presidente de las Cortes y que anoche participó en un acto en la Residencia de Estudiantes. Peces-Barba, que considera que Garzón "no es un prevaricador", demandó a los jueces "respeto por la ciudadanía y por lo que supone la memoria histórica".

La portavoz del Consejo del Poder Judicial, Gabriela Bravo, también criticó las presiones al Tribunal Supremo. "Los ciudadanos de un país democrático tienen derecho a manifestarse y además a

ejercer su libertad de opinión, pero lo que no podemos tolerar", explicó, "son los ataques sistemáticos a las Instituciones, y en este caso al máximo órgano del poder judicial, como es el Tribunal Supremo".

Lo que sí hizo ayer el grupo progresista del Consejo fue hablar de la vacante en la presidencia de la Sala Tercera del Supremo. Vocales consultados coinciden en que los siete jueces aspirantes son "muy buenos". Y avanzaron que es probable que en el pleno del día 22 haya un acuerdo

entre progresistas y conservadores sobre el sustituto de Ramón Trillo al frente de esta Sala, que es la que lleva los pleitos entre los ciudadanos y la Administración. E incluso los recursos contra las propias decisiones del Consejo.

Pero los reuelos en el sector progresista siguen a flor de piel. Un hecho ha enardecido el ambiente. Hace cuatro días, la Comisión de Calificación del Consejo decidió, por tres votos a favor y dos votos particulares en contra (los del progresista José Manuel Gómez Benítez y el conservador Claro José Fernández) elevar al pleno, sin extraer ninguna terna, a los siete jueces que se postulan para el cargo. Dado que uno de los que apoyaron esta propuesta fue el progresista Félix Azón, del fin de Margarita Robles, se pensó que podía tratarse de una jugada más de Robles para colocar a uno

El Supremo no ha comunicado aún al Consejo el auto de Varela contra Garzón

Conde-Pumpido arremete contra las críticas al alto tribunal

de sus amigos, en concreto a José Manuel Bandrés, en la presidencia de la Sala Tercera, en la que estará Robles cuando expire su mandato en el Consejo. Pero no. El grupo progresista descartó ayer a Bandrés por su "juventud" y se decantó porque el nuevo presidente sea alguno de los siguientes jueces: José Manuel Sieira o Fernando Montalvo, ambos progresistas. La opción de los conservadores es Ricardo Enriquez. A los progresistas, sólo como última opción, no les parecería mal Enriquez.

El PP se opone al intento del PSE de que la Cámara vasca apoye al juez

ISABEL C. MARTÍNEZ, Vitoria

El PSE-EE presentó ayer en el Parlamento vasco la primera iniciativa institucional de apoyo al juez Baltasar Garzón, similar a otras que promoverá en las tres Juntas Generales y en todos los ayuntamientos, según anunció su portavoz parlamentario, José Antonio Pastor. La propuesta busca el apoyo de la Cámara a Garzón ante la "campana de acoso de grupos de ultraderecha" y el respaldo a su investigación de los crímenes del franquismo. Pero no contará con el respaldo del PP.

Los socialistas justificaron su iniciativa en la "gran alarma social" y la "repercusión internacional sin precedentes" que está teniendo la imputación de Garzón y su posible apartamiento de la carrera judicial. El PSE presentó su iniciativa como un apoyo a la independencia del poder judicial y una reivindicación de "la dignidad profesional" de Garzón. El texto condena "las maniobras de grupos de extrema derecha para impedir la investigación de crímenes franquistas".

Pastor confió en que la Cámara respalde la iniciativa, sin distinciones entre derecha o izquierda y nacionalistas o no nacionalistas. "Nadie puede sentirse cómodo con que Falange Española sienta en el banquillo a un juez" al que considera "emblema nacional e internacional de una Justicia independiente y democrática".

Sin embargo, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoti, cuyo grupo parlamentario sostiene al Gobierno de Patxi López, adelantó que no apoyará la propuesta. "No vamos a seguir ninguna política insensata, por mucho que lo plantease el PSE o el propio Patxi López", advirtió. A su juicio, el movimiento en apoyo al magistrado de la Audiencia Nacional es "un despropósito que está desacreditando la Transición".

Terapia en el encierro de la universidad

EL PAÍS asiste a una sesión de grupo con familiares de las víctimas

NATALIA JUNQUERA, Madrid

Se dejaron llorar. Se hicieron preguntas y a ratos elevaron la voz para mostrar su indignación con el proceso contra Garzón. El aula universitaria donde tiene lugar el encierro simbólico en apoyo del juez acogió ayer una sesión de terapia de grupo para familiares de víctimas del franquismo.

"A mi abuelo lo asesinaron. Tenía cinco hijos. Lo que sé de él lo sé por lo que me contaba con mucho miedo mi madre, que tenía 13 años cuando lo mataron", arrancó Carmen Páez. "Era guar-

dia de asalto. Le llevaron dos veces para darle el paseo. Una se tiró del camión; a la segunda, le tirotearon y se hizo el muerto. A mi abuela le hicieron la vida imposible. Todas las noches, a las dos de la mañana, la sacaban a la calle, sin ropa, para humillarla. El día que terminó la guerra, mi abuelo se entregó. Le pegaron un tiro en la nuca y hasta hoy".

El resto de los familiares aplaude. "Carmen, me has hecho llorar...", continúa Fausto Canales. "Yo tenía dos años cuando se llevaron a mi padre. Sus restos están en el Valle de los Caídos.

Llamaron a la puerta y se lo llevaron con siete más. Hace 11 años empecé a buscar y encontré a un testigo de la exhumación que hicieron en 1959 para trasladarlos a ese sitio horrendo. Se habían dejado un cráneo, restos de dientes... Luego puse la denuncia en la Audiencia Nacional..."

Antonio Virtud, de 80 años, pide la palabra: "Mi casa tenía tres habitaciones, un comedor y una cocina", arranca su relato. "Mi padre murió en la guerra y a mi madre le quitaron la pensión de viuda. Nos metieron en un tren de mercancías, abarrotado de vie-

jos, niños y mujeres, hacia Madrid... Vivimos en unas chabolas a las afueras seis años...".

Pura Francisco saca de su bolso un marco con la foto de su abuelo: "Le mataron con cinco hombres y una mujer en la carretera de Astorga. Mi abuela tenía siete hijos: el mayor, mi padre, de 17 años, y el más pequeño de 11 meses", dice antes de romper a llorar. Los asistentes la animan a seguir. "Mi padre decidió unirse al bando republicano y terminó en un campo de concentración. Pero sobrevivió. Pidió justicia toda su vida".